

## DISIDENTE EN JEFE. LA PRESIDENCIA DE GEORGE W. BUSH

“Si Dios quiere que (la guerra) continúe hasta que... cada gota de sangre extraída por el látigo encuentre su precio en otra extraída con la espada, como se prometió hace tres mil años, aún debería afirmarse que los juicios del Señor son verdaderos y justos”.

“La utilización por parte del presidente de su autoridad ejecutiva durante la guerra fue con frecuencia ilegal e injusta, ...habiendo abusado descaradamente de su poder en materia de derechos civiles. Hizo cosas como suspender derechos constitucionales y autorizar el presupuesto de defensa sin pasar por el Congreso... El presidente extrajo su autoridad de la disposición constitucional en la que se le inviste como ‘Comandante en Jefe del Ejército y de la Armada de los Estados Unidos’. ...Alegó que, por virtud de esa disposición, tenía el derecho de utilizar todos los medios necesarios para derrotar al enemigo”.

“Es un déspota, mentiroso, ladrón, fanfarrón, bufón, usurpador e ignorante”.

### “BUSH ES EL PEOR PRESIDENTE DE LA HISTORIA”<sup>1</sup>

**E**l lector colegirá que, a la vista de los párrafos anteriores, el objeto de este artículo es argumentar, como otra infinidad de ellos, a favor de la opinión convencional y mayoritaria de que George W. Bush ha sido uno de los peores presidentes de la historia. Si lo hiciera estaría precipitándose, porque esas citas se refieren al decimosexto presidente, Abraham Lincoln, y no a su sucesor 136 años después. La primera corresponde a un fragmento del Segundo Discurso Inaugural del propio Abraham Lincoln, el 4 de marzo

---

Álvaro Martín es escritor

<sup>1</sup> El historiador Michael Bechloss en 2008, pero una multitud de historiadores y articulistas han hecho la misma formulación en estos o parecidos términos.

de 1865, considerado por algunos como el discurso político más trascendente de la historia. El segundo, a una sección titulada “El abuso de poder de Abraham Lincoln”, que aparece en la página-web <http://123helpme.com>, uno de esos portales de divulgación que representan el consenso educativo sobre una determinada materia. El tercero, a un editorial sobre Lincoln de la prestigiosa revista *Harper's Weekly*, la más conocida del siglo XIX en EE.UU., en 1861.

Lincoln es considerado hoy el más grande presidente de la historia. Pero, contemporáneamente, ninguno fue tan impopular como él. De George W. Bush se dice que tiene las manos manchadas de sangre por la muerte de cuatro mil soldados en Iraq.

- En la guerra de Lincoln, la Guerra Civil –una guerra evitable si Lincoln hubiera aceptado la independencia del Sur–, murieron 600.000 americanos.

Franklin Delano Roosevelt es reconocido generalmente como el presidente de más estatura del siglo XX. De George W. Bush se dice que ha violado las normas humanitarias de las Convenciones de Ginebra al mantener a seiscientos prisioneros en Guantánamo –afirmación que, incidentalmente, el Departamento de Defensa de la Administración Obama desmiente en un reciente informe en el que se afirma que el trato a los prisioneros es conforme a dichas Convenciones.

- Roosevelt internó en campos de concentración a 200.000 americanos de origen japonés por el hecho de serlo.

John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson son considerados grandes presidentes, paradigmas de idealismo y adalides de los derechos civiles. De George W. Bush se dice que su ocupación de Iraq fue ilegal, ilegítima e injusta. De ser ese el caso, sus ilícitos fueron cometidos en abundante compañía, incluyendo muchos de sus críticos en el Congreso que votaron a favor de la Guerra de Iraq (la autorización del Senado americano al presidente fue aprobada por setenta y siete votos a favor contra veintitrés en contra, incluyendo la mayoría de la oposición demócrata). Y si la objeción lo fuere en el plano internacional por la ausencia de autorización del Con-

sejo de Seguridad de la ONU, conviene recordar que éste sólo ha autorizado tres conflictos en su historia (Corea, Primera Guerra del Golfo y Afganistán), y todas las demás intervenciones, más de una cuarentena en este medio siglo, han ocurrido sin su aval.

- John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson iniciaron el conflicto de Vietnam, y el segundo popularizó los bombardeos con napalm sobre la población civil, sin autorización de la ONU o del Congreso.

Johnson, Wilson, Roosevelt... grandes presidentes, escrupulosos con la Constitución y con las nociones más acendradas de democracia. Johnson, Wilson, Roosevelt... son objeto de veneración. De George W. Bush se dice que ha pisoteado los derechos civiles y perseguido a la oposición porque autorizó un programa de inteligencia dirigido a captar las conversaciones de militantes de al Qaeda con personas dentro de Estados Unidos. El Congreso reautorizó el programa a posteriori y los tribunales sancionaron su legalidad.

- Lyndon B. Johnson puso en marcha un programa de escuchas a ciudadanos americanos (bajo la égida de Edgar Hoover y el FBI), especialmente de la oposición. Woodrow Wilson puso en pie de guerra a casi un millón de militantes demócratas para reprimir la libertad de asociación de los críticos y encerrarlos sin juicio previo. Franklin D. Roosevelt coqueteó con la idea de crear una especie de cuerpo de camisas negras o pardas en plena implantación de los embriones del Estado corporativista italiano durante el New Deal.

Jimmy Carter y Bill Clinton son exhibidos como ejemplos de ecumenismo y compromiso con los principios del secularismo. De George W. Bush se dice que ha querido implantar una teocracia cristiana en EE.UU. y que ha hecho ostentación de su fe. Pero nadie es capaz de ilustrar el caso excepto con la acusación, aparentemente muy grave, de que George W. Bush firmó el proyecto de ley, al que le sometió el Congreso en 2003, de prohibición de esa forma de infanticidio llamada “aborto por nacimiento parcial”.

- Jimmy Carter fue aupado a la presidencia por el voto evangélico, y la plataforma personal e ideológica de su campaña fue su cristianismo mi-

litante. Ningún presidente ha hecho profesión de fe pública tan frecuentemente como Bill Clinton, que incluía en su agenda pública encuentros con líderes religiosos para la oración.

Carter, Roosevelt, Obama... De George W. Bush se dice que ha legado la peor depresión económica y una situación de grave déficit fiscal, pero después de siete años de crecimiento económico y creación de empleo, el índice Dow Jones, cuando dejó la presidencia, estaba más de dos mil puntos por encima de lo que registraba después del primer mes de la siguiente Administración, y el paro aún se encontraba muy por debajo del 7%.

- Jimmy Carter dejó una América desmoralizada, quinientos americanos de rehenes en Irán por espacio de año y medio, con una inflación galopante y un paro de dimensiones desconocidas antes o después, con la excepción de la Gran Depresión. Henry Morgenthau, secretario del Tesoro de Franklyn Delano Roosevelt, reconoció que la depresión de los años treinta, con un tercio de la población activa en paro, fue en parte consecuencia de las políticas de su Administración, y que sólo la Segunda Guerra Mundial salvó a EE.UU. de la debacle económica. Desde que en mayo de 2008 vino a estar claro que Barack Obama obtendría la nominación para la presidencia, el índice Dow Jones ha perdido más de un 20% de su valor y, durante las primeras seis semanas de su mandato, un 10%, mientras el déficit fiscal se multiplicaba por tres.

De George Bush se dice, en definitiva, que es el peor presidente de la historia americana (una historia que incluye presidentes racistas, segregacionistas, procesados por delitos, tiránicos, antisemitas, belicosos y hasta sureños separatistas), y se viene diciendo desde 2005, en un caso llamativo de precipitación que traiciona la animosidad y la irracionalidad del odio al presidente.

Han secuestrado su nombre, tienen encerrada su honorabilidad en una prisión hecha de fanatismo e ignorancia. Una detrás de otra han cerrado las puertas blindadas de la prisión sobre su recuerdo, y ahora tienen su dignidad y su honor bajo un centenar de candados que no pueden abrirse sino con la concurrencia de cien llaves diferentes. Las llaves están en manos de cien

hombres distintos; y esos hombres se han dispersado por cien parajes a cual más remoto, y aun ahora cavilan en los repliegues de su entendimiento sobre qué invención, en todos los dominios de la mente y de la materia, puede idearse que haga la imposibilidad de su fuga más completa de lo que ya es.

**“MUCHAS VECES LO QUE HICE NO ERA POPULAR... SIEMPRE HICE LO QUE CREÍ ERA LO MEJOR”<sup>2</sup>**

Familias enteras eran apresadas en el Kurdistán o en las marismas del Sur cada vez que el régimen quería escarmentar a la población civil por la mera existencia de oposición a su régimen. Los hombres eran separados de las mujeres y los niños. Los niños eran arrojados a las máquinas trituradoras primero. Los verdugos de Saddam y su hermanastro Sabawi, todos del clan de los al Tikriti, tenían instrucciones de introducirles por los pies, de forma que su agonía se prolongara, con sus padres por testigos. Las mujeres sufrían el mismo destino que sus hijos a continuación. Los padres, en último término. En otras ocasiones, los carceleros sostenían mangueras de goma sobre el fuego, directamente encima de los cuerpos de las víctimas. El plástico fundido caía sobre sus torsos, o sobre sus caras o sobre sus partes íntimas. Cuando el plástico se enfriaba, lo arrancaban salvajemente, arrastrando pedazos de piel y de carne. Madres embarazadas eran torturadas de esa forma hasta su muerte. Los fetos eran envueltos en periódicos y arrojados a la basura.

La noche en que el presidente Bush decidió el comienzo de la operación iraquí *Freedom*, después de escuchar el parecer de su gabinete, fue a pasear por los alrededores de la Casa Blanca. “Estaba rezando”, dijo al periodista Bill Sammon, “Acababa de tomar la decisión más grave que un presidente puede tomar –enviar a hombres y mujeres jóvenes a un peligro cierto– y necesitaba el consuelo de la Providencia”.

En alguna parte de la opinión pública se ha instalado la especie de que el presidente y su Administración fueron a la guerra, con el pretexto de las

<sup>2</sup> George W. Bush en su discurso de despedida el 15 de enero de 2009-03-04.

armas de destrucción masiva, para poder controlar la producción de petróleo en Iraq. Ésa hubiera sido una motivación rocambolesca. Iraq estaba bajo sanciones, contestadas por buena parte de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, incluidos los europeos. EE.UU. podía haber presentado una resolución abrogando el régimen de sanciones en el correspondiente órgano del Consejo, y en veinticuatro horas hubiera abierto el negocio petrolero a las compañías americanas. Y ya en ello, la Administración de George W. Bush podría haber presentado proyectos de ley en su propio Congreso para levantar las sanciones unilaterales de EE.UU. a Irán y Libia, de donde sólo las compañías americanas estaban unilateralmente excluidas.

La política de intervención en Iraq para derribar a Saddam Hussein no había sido establecida por el presidente Bush. Había sido heredada de la Administración Clinton, que la había adoptado en 1998. Al Gore, entonces vicepresidente, había sido a la sazón el factor más determinante e insistente para la adopción de esta política. La Administración Clinton entendía que la política de contención de Saddam Hussein había fracasado y que el derrocamiento de Saddam era inevitable. Y eso antes del 11 de septiembre. Después de ese día, la Administración Bush decidió que no podía correr el riesgo de dejar a Saddam en la intersección del terrorismo, las armas de destrucción masiva, el extremismo religioso y la autocracia en la región más peligrosa en el momento histórico más comprometido.

La “carrera” hacia la guerra fue, más bien, un proceso lento y tortuoso que duró casi diez meses. El caso legal contra Saddam en la ONU se fundamentó en su posesión de armamento de destrucción masiva, que nadie dudaba, pero el argumento político, humanitario y de seguridad era mucho más amplio. Después de la invasión, las armas no aparecieron, bien es cierto, aunque el informe ulterior de los inspectores de la ONU determinaría que los programas estaban en marcha, incluyendo las órdenes de adquisición de componentes, y el régimen de sanciones había colapsado. El caso de las armas desaparecidas sirvió para deslegitimar a posteriori la intervención, pero prácticamente ninguno de los críticos de la misma había expresado objeciones en esa dirección, ni dentro ni fuera de EE.UU. Su problema no era el caso legal de la Administración, sino el caso político.

La Guerra en Iraq, en estos seis años, ha sido un conflicto extraordinariamente complicado con un objetivo trascendente, la mejor ilustración de la llamada doctrina Bush, también conocida como “realismo moral democrático”, y que Bush enunció en su Segundo Discurso Inaugural: “La supervivencia de la libertad en nuestro hogar depende del progreso de la libertad en otros. La mejor esperanza de paz en nuestro mundo es la expansión de la libertad en todo el mundo”. Ése era el objetivo de la ocupación de Iraq. En un ambiente de seguridad impensable apenas un año antes, los electores iraquíes acudieron el 31 de enero de este año a elegir los gobiernos de las dieciocho provincias iraquíes. Las elecciones otorgaron el triunfo a los partidos laicos y más moderados del espectro político, incrementando la estabilidad política en la misma dirección que la estabilidad militar e, irónicamente, abriendo la puerta a la retirada de las tropas americanas por parte de la nueva Administración. Iraq es, para los estándares de la región, un país admirablemente democrático y potencialmente un tremendo factor de progreso. Cuando Bush accedió a la presidencia en 2001, la política de seguridad de la anterior Administración tenía por objetivo la doble contención de Irán e Iraq. Ocho años más tarde, el país que entonces era una amenaza se ha convertido en un aliado, mientras la presión yihadista en Estados como Marruecos, Jordania, Siria o Arabia Saudita ha descendido después de años en que grupos radicales, muchos afiliados con al Qaeda, dejaban esos países para ir a luchar a Iraq, donde, manifiestamente, han perdido la guerra.

**“LOS AÑOS PASARON... LA MAYORÍA DE AMERICANOS PUDIERON VOLVER A SUS VIDAS COMO HABÍAN SIDO ANTES DEL 11 DE SEPTIEMBRE. YO NO”<sup>3</sup>**

Un crítico de la decisión de intervenir en Iraq, George Will, escribía en *Newsweek*, el 26 de enero pasado: “Algunos, y quizás muchos, americanos probablemente están vivos hoy porque personas que conspiraban para cometer asesinatos a gran escala fueron detenidos por el presidente”. Es inquestionable que en los meses posteriores al 11 de septiembre de 2001,

<sup>3</sup> George W. Bush. *Ibidem*.

nadie albergaba dudas de que EE.UU. sería atacado de nuevo, tal vez con armas nucleares, químicas o biológicas, de forma irreparable, y que la supervivencia de muchos americanos, si no de la nación misma, estaba seriamente comprometida. En 2009, EE.UU. no había sido atacado desde entonces, y no por falta de múltiples intentos, sólo una fracción de los cuales ha llegado al conocimiento público. Cada cual puede mezclar los ingredientes de la vigilancia y el celo de la Administración, sus políticas, la corrección de problemas estructurales de la seguridad interior americana o la suerte en las dosis que le parezcan óptica o ideológicamente mejores. Pero debe necesariamente incluir todos esos elementos.

La Comisión bipartidista del 11 de septiembre concluyó en su Informe que los terroristas estaban en guerra con EE.UU. desde hacía dos décadas, pero EE.UU. no estaba en guerra con ellos. Osama bin Laden había tomado nota de las retiradas de Líbano, de Somalia, de la falta de reacción del Gobierno americano después de los atentados contra las Embajadas de Kenia y Tanzania durante los 90, y decidido que EE.UU. era un tigre de papel, perfectamente maduro para el golpe de gracia. Si la voluntad de autodefensa estaba en cuestión a los ojos de Osama bin Laden, la capacidad de defensa interior lo estaba aún más.

Desde la creación del entramado de seguridad nacional durante la Administración Truman, se había establecido una “pared de separación” entre las actividades de inteligencia y las policiales, de tal manera que, por ejemplo, la CIA no podía advertir al FBI de la existencia de potenciales atentados terroristas, ni el FBI actuar para impedirlos sobre la base de investigaciones de ésta u otras agencias federales. El problema quedaba perfectamente ilustrado por el hecho de que varios de los terroristas suicidas del 11 de septiembre recibieron sus visados de residencia por razón de estudios meses después de los atentados. Eso es lo que la Comisión del 11 de septiembre echó en falta al observar que las Administraciones de Clinton y Bush no habían “trazado una línea entre los puntos”, que representaban otros tantos vectores de investigación, cuya culminación hubiera frustrado los propósitos de los terroristas, desde el ordenador de Zachariah Moussaui –el llamado “vigésimo terrorista”– hasta las lecciones de vuelo, que no incluían ni despege ni aterrizaje, de los terroristas suicidas en Flo-

rida. En rigor, CIA y FBI y el resto de las agencias de seguridad estaban legalmente imposibilitadas para conectar esos puntos por la razón legal indicada. Eso es lo que remedió la llamada “Ley Patriótica” (o “Patriot Act”), que permitió a las agencias federales, especialmente las agencias de seguridad exterior e inteligencia y el FBI y las policías locales, comunicarse entre sí. La Patriot Act fue aprobada abrumadoramente por el Congreso –era una ley del Congreso–, incluyendo la plana mayor de la entonces oposición demócrata, y reautorizada dos veces más por el propio Congreso.

Los aspectos más polémicos de la llamada “Guerra contra el Terror” durante la Administración Bush, y que granjearon al presidente la desaprobación y el desprecio universales, tienen que ver con el trato a los detenidos, en Guantánamo o en Afganistán, las garantías legales de los mismos y su acceso a representación legal así como los interrogatorios a sospechosos de terrorismo. En el último mes, sin embargo, decisiones adoptadas por la actual Administración y el propio testimonio de sus altos cargos –por ejemplo, al nada sospechoso *New York Times*– permiten colegir que algunos, tal vez muchos de esos instrumentos, continúen vigentes, con unos u otros matices. En sus testimonios ante el Senado, tanto el director entrante de la CIA, Leon Panetta, como la futura Abogada General del Estado, Elena Kagan, han apoyado la continuación del programa de la CIA de transferencia de prisioneros a otros países sin procesos regulares de extradición o garantías legales para los detenidos, así como la detención de sospechosos de terrorismo sin proceso legal, incluso cuando los apresados lo hayan sido lejos de zona de guerra. Elena Kagan dijo que esta política era aplicable para casos como la detención de sospechosos de financiar a al Qaeda en puntos alejados del teatro convencional de las operaciones de lucha contra al Qaeda, como Filipinas. Panetta avanzó la posibilidad de que la CIA continúe, bajo su gestión, el programa de traslados secretos de presos a terceros países, que tanto revuelo han causado en Europa –los famosos “vuelos secretos de la CIA”, como se han venido en denominar.

Respecto a las técnicas de interrogatorio, el nuevo presidente prohibió, el primer día de su mandato, cualesquiera técnicas no especificadas en el manual del Ejército, en el entendimiento de que el manual, como es el caso, está en conformidad con las Convenciones de Ginebra y con el De-

recho Constitucional americano, que prohíbe infligir a los detenidos trato degradante o injusto. Pues bien, Panetta dejó la puerta abierta a otras técnicas si las existentes se revelaban “insuficientes” a la hora de forzar a un detenido a divulgar detalles sobre un ataque inminente, en cuyo caso, solicitaría permiso para adoptar otras medidas coercitivas de la voluntad del prisionero.

Por cierto, ¿he dicho ya que la práctica de “waterboarding”<sup>4</sup> exhibida como irrefutable prueba de tortura por parte de los críticos de la Administración Bush –y que presuntamente fue prohibida por el presidente Obama el 21 de enero de este año– fue, en realidad, proscrita por el presidente Bush en 2005?

Un gran aparato publicitario rodeó la decisión del nuevo presidente de cerrar el campo de detención de Gitmo, en Guantánamo, también adoptada en las horas siguientes a asumir la presidencia. Obama, de momento, mantiene sus opciones abiertas a la espera de recibir recomendaciones sobre el destino de los 245 detenidos allí. El primer informe que encargó el nuevo presidente al almirante Patrick Walsh concluyó que el trato a los allí detenidos es conforme con las Convenciones de Ginebra de 1949. Hay que recordar que el argumento de cargo para el cierre de Guantánamo ha sido siempre la premisa de la no conformidad del trato a los prisioneros de Gitmo con el articulado correspondiente de las Convenciones de Ginebra (y ello a pesar de que éstas se refieren a detenidos pertenecientes a ejércitos regulares y no al fenómeno, inexistente en 1949, del terrorismo global).

Guantánamo ha sido durante siete años el símbolo de la oposición a las políticas del presidente Bush, pero es un lugar anecdótico en el contexto del mucho mayor número de detenidos en Afganistán, en Iraq y en las prisiones secretas de la CIA. Respecto de lo último, ya se especulaba con anterioridad sobre su eventual continuación. Respecto a los detenidos en las dos zonas de guerra, el Departamento de Justicia de la actual Administración ha reafirmado la posición de su antecesora recientemente al solicitar

---

<sup>4</sup> La técnica consiste en causar una sensación psicológica de ahogo, que no física. Es una técnica utilizada en los entrenamientos de soldados de Operaciones Especiales de EE.UU. y del cuerpo de Marines.

a un juez federal que desestime demandas legales de prisioneros detenidos en Afganistán para la revisión de su caso en tribunales ordinarios. El Departamento de Justicia argumentó que los seiscientos prisioneros en Afganistán no tienen derechos legales de ninguna clase por encontrarse en zona de guerra (lo cual es igualmente aplicable a los detenidos en Iraq) y que sus peticiones de *habeas corpus* carecen de base legal. Por su parte, el presidente Obama no ha ordenado revisión alguna de la situación de estos prisioneros o de los detenidos en Iraq.

Ni siquiera es seguro que los Tribunales de Justicia americanos sustituyan a las Comisiones Militares que han juzgado estos años atrás a los presos en Guantánamo. La Ley del Congreso que los estableció fue declarada constitucional por el Tribunal Supremo y la nueva Administración ha suspendido esos procedimientos pero no necesariamente –no aún, en todo caso– prescindido de ellos formalmente, mientras estudia qué hacer con los detenidos, lo que no siempre, y ni siquiera con frecuencia, incluirá su enjuiciamiento por un tribunal federal.

Todo lo cual quiere decir que la Administración actual puede proseguir con unas pocas, muchas o todas las prácticas –introduciendo modificaciones cosméticas o sustanciales– que convirtieron a Bush y Cheney en los líderes más repudiados de la historia reciente. Como mínimo es justo reconocer que la actual Administración considera que, al lado de argumentos para cambiar unas cosas u otras, existen argumentos plausibles de legalidad y de eficacia para mantener el entramado genérico de lucha contra el terrorismo de la Administración que la precedió. E, incluso si resultara que a la postre terminaran cambiando muchas cosas –y los indicios no van en esa dirección– no habrá sido sin un grado alto de deliberación, que debería invitar a pensar a los muchos y vehementes críticos que los objetos de su crítica no eran tan cegadoramente evidentes.

Y eso sin empezar a ponderar lo que sí resulta evidente: que “algunos, tal vez muchos, americanos probablemente están vivos” gracias al presidente que una buena porción de ellos considera, a la vez, un idiota incapaz de expresar un pensamiento complejo y un maquiavélico y consumado manipulador político.

## “AMÉRICA NECESITA IDEALISMO Y VALOR”<sup>5</sup>

“El mandato de Bush ha dividido, pero no en África. He leído que ha sido incompetente, pero no en África. Que ha creado acritud, pero no aquí en África. Aquí su Administración ha salvado a millones”. Así se expresaba el cantante irlandés y activista pro-África Bob Geldof en 2008. O, en palabras de Bono, de U2: “Es increíble lo que el presidente Bush ha hecho en relación con la epidemia de SIDA... poner la cuestión del SIDA en tercer lugar de importancia en una alocución sobre el estado de la Unión por parte de un presidente americano hubiera sido impensable hace unos años”.

La popularidad del presidente ha podido ser escasa en el Oeste, pero ha sido y aún hoy es el presidente americano más popular en África, el continente olvidado, al menos por quienes profesan tenerle más en cuenta: los medios de comunicación, las agencias humanitarias y muchas personas de sensibilidad progresista. Pero no olvidado por el presidente Bush. La política para África de Bush es lo más cercano a un éxito puro de un político en mucho tiempo. El índice de aprobación del presidente ha sido del 80% en el continente durante la mayor parte de su gestión. En 1987, por ejemplo, el sondeo anual de la empresa Pew (ése que arrojaba cifras espectaculares de desaprobación del presidente en Europa) establecía un 88% de aprobación en Costa de Marfil, un 87% de aprobación en Kenia, un 80% en Ghana.

¿Cuál es el motivo de la inmensa popularidad de George W. Bush en África? En primer lugar el hecho de que su Administración triplicó, sin gran aparato de publicidad eso sí, la ayuda a África con respecto a la Administración Clinton. Y, fundamentalmente, su Plan de Emergencia contra el SIDA, anunciado en 2003 en esa alocución a la que se refería el cantante Bono, y que representa la mayor inversión en sanidad en la historia del planeta: 17.000 millones de dólares en el periodo 2004-2008.

---

<sup>5</sup> George W. Bush. Segundo Discurso Inaugural.

## “EL DEBER MÁS BÁSICO DE TODO GOBIERNO ES DEFENDER LA VIDA DEL INOCENTE”<sup>6</sup>

“El Doctor Haskell introdujo el fórceps y agarró las piernas del bebé, tirando hacia abajo. Una vez hecho eso, sacó el cuerpo y los brazos del bebé hacia fuera, todo menos la cabeza. El doctor dejó la cabeza dentro del útero. Los deditos del bebé se abrían y cerraban, mientras agitaba los pies. Entonces el doctor clavó las tijeras en la nuca del niño, momento en el que los brazos del bebé se estremecieron, como una reacción de miedo, como lo que hacen los bebés cuando creen que van a caerse. El doctor abrió entonces las tijeras, introdujo un tubo de aspiración en la apertura y succionó el cerebro del bebé. El cuerpo del bebé devino inerte. Después cortó el cordón umbilical y extrajo la placenta y arrojó el bebé en una bandeja, junto con la placenta y los instrumentos que había utilizado”.

Éste es el testimonio ante la Comisión de Justicia del Senado de EE.UU. de una enfermera que asistió a la práctica de un aborto por la modalidad de provocar el nacimiento parcial (“partial birth abortion”) a un bebé viable de seis meses y medio por el doctor Martin Haskell, que había realizado cientos de ellos. Sólo una fracción de los 1.300.000 abortos que ocurren anualmente en EE.UU. se realizaba por ese bárbaro procedimiento. Gracias al presidente Bush esta monstruosidad es ahora delito en EE.UU. Hay niños en EE.UU. que literalmente deben la vida a George W. Bush. Su predecesor, el presidente Clinton, había vetado dos veces sendos proyectos de ley para penalizar esta barbarie. Bush lo hizo a la primera oportunidad que tuvo, en 2003, diciendo: “Durante años, una forma terrible de violencia ha sido ejercida contra niños apenas separados por milímetros de su nacimiento, mientras la ley miraba hacia otro lado... El mejor argumento contra el aborto con nacimiento parcial es la simple descripción de lo que pasa y a quién le pasa. Implica la extracción parcial de un niño vivo y el fin súbito y violento de su vida... El deber más básico de todo gobierno es defender la vida del inocente... Su derecho a la vida no puede ser concedido o denegado por los poderes públicos, porque no viene de ellos”.

<sup>6</sup> George W. Bush en 2003 en el acto de firma de la ley de proscripción del procedimiento de aborto por nacimiento parcial.

Jueces federales en Nueva York, California y Nebraska declararon la ley inconstitucional. Linda Greenhouse, una influyente periodista del *New York Times*, acusó al presidente Bush de un “prolongado asalto a los derechos reproductivos de las mujeres y el secuestro de la política por el fundamentalismo religioso”. Esta opinión fue repetida hasta la saciedad por medios de comunicación, actores, activistas, políticos y jueces, hasta que el resto del mundo terminó acusando al presidente de golpista teocrático. Éste es el origen de la leyenda del fundamentalismo cristiano del presidente. Éste y no otro. La autenticidad y la hondura del sentimiento religioso del presidente, su creencia en el valor de la vida y su sacrificio personal, y su valor posibilitaron la supervivencia de la ley. El Tribunal Supremo americano terminó refrendando la constitucionalidad de la ley en abril de 2007. El fundamentalismo secularista de sus adversarios, sin embargo, ganó la batalla de la opinión pública y de la satanización del presidente, pero esa batalla George W. Bush la concedió gustoso.

El presidente cree en el valor de la vida y, como todos los que comparten esa creencia, con fundamento religioso o no, respeta las leyes, aunque aspira a que algún día exista una mayoría legislativa que permita cambiarlas en un sentido compatible con el derecho a la vida del inocente. Pero algunos activistas radicales a favor del “derecho de la mujer a decidir” cuentan con una fuerza de choque en una judicatura abrumadoramente mayoritaria en sus convicciones proabortistas. En EE.UU. muchos jueces federales durante los últimos cincuenta años, pretextando su facultad constitucional de revisión de la constitucionalidad de las leyes, se han arrogado la prerrogativa de crear derechos y denegarlos según el sentido de su preferencia ideológica, generalmente en dirección progresista. Su escuela jurídica establece que la Constitución es un “documento vivo”, que hay que interpretar a la luz de los tiempos, cosa que no pasaría de ser un argumento de equidad si la equidad fuera la guía y si en EE.UU. el Congreso, el representante de la mayoría popular, pudiera legislar y no verse disputada esta competencia por los jueces. En la práctica, los jueces que se adscriben a esta escuela activista fingen descubrir que los Padres Fundadores han escondido ingeniosamente en los siete artículos de la Constitución un sedicente derecho al aborto, por ejemplo. En 1973, una decisión del Tribunal Supremo, la celeberrima “Roe v. Wade” concluyó precisamente eso. Desde

entonces, el aborto apenas conoce otra restricción en EE.UU. que la que se ha referido más arriba.

Pues bien, el presidente prestó un servicio inestimable a la causa de la legalidad constitucional al nombrar a dos jueces, John Roberts y Sam Alito, impecablemente comprometidos con la interpretación de la Constitución en función de lo que dice y no de lo que, en retrospectiva, uno quisiera que dijera, lo que en la práctica convierte el Estado de Derecho en una farsa. Para que la Constitución diga algo diferente está el Congreso y el procedimiento de reforma establecido en la propia Constitución. Roberts y Alito son un legado presidencial destinado a perdurar.

### **“ME SIENTO UN DISIDENTE EN WASHINGTON”<sup>7</sup>**

Uno de los rasgos más peculiares del síndrome de desquiciamiento provocado por el presidente Bush es que afecta a la izquierda, ciertamente, pero también a la derecha. Y ni los primeros ni los segundos reparan en los rasgos que les identificarían con el presidente, sino que ven en él la expresión de todas las cosas que aborrecen. En la izquierda es la defensa del derecho a la vida, la guerra contra el terror, la negativa a asumir los manierismos melodramáticos del cambio climático y su agenda radical de transformación del sistema socio-económico occidental, o su nula inclinación a seguir los dictados de los medios de comunicación o de los “intelectuales”. Y especialmente, su voluntad de prevalecer en Iraq, gracias a la cual –y en la soledad política y humana más estremecedora de ningún líder desde Lyndon Johnson hace cincuenta años– el presidente Obama puede retirar ahora las tropas de Iraq habiendo consolidado los objetivos de la operación iniciada en 2003. No son muchos, en la derecha, los que alaban al presidente por esa hoja de servicios. Son todos, en la izquierda, los que le censuran de la manera más inmisericorde.

Y en la derecha, los pecados capitales de George W. Bush, que le costaron la desafección de parte de la base conservadora republicana fueron, por este orden:

<sup>7</sup> George W. Bush en 2007 a un activista proderechos humanos de origen egípcio.

- La inmigración: en 2007, el presidente y una mayoría bipartidista del Congreso (liderada por John McCain y Ted Kennedy) impulsó una legislación reformista que tenía por objetivo, *grosso modo*, la regularización de los doce millones de inmigrantes ilegales en EE.UU. y el reforzamiento de los sistemas de vigilancia en frontera para mitigar la masiva violación de la soberanía americana que supone el volumen de inmigración ilegal. La legislación fracasó porque una mayoría de americanos objetaba a las provisiones de adquisición preferente de la residencia y de la nacionalidad concedidas a los ilegales, y contemplaba con escepticismo el compromiso del Congreso con la vigilancia de las fronteras.
- La subvención para la adquisición de productos farmacéuticos a favor de los pensionistas. El presidente y el Congreso (nótese que el Congreso, obviamente, fue el que prestó su asentimiento a las iniciativas del presidente, y que EE.UU. no es una democracia parlamentaria –por tanto Congreso y Administración no se necesitan mutuamente) otorgaron esos beneficios, dentro del programa federal conocido como Medicare. Lo hicieron precisamente en el momento en que la generación de la explosión demográfica de los años cincuenta empieza a acceder a la jubilación, provocando la mayor expansión del Estado del Bienestar desde su creación en 1965 por la Administración de Johnson.
- La reforma de la educación primaria operada por la ley denominada “No child left behind” (NCLB), que el presidente negoció y defendió con el símbolo de la izquierda americana, Ted Kennedy. La NCLB establecía la supervisión por parte del Departamento de Educación de los niveles de enseñanza en los Estados. A pesar de que el programa supuso un beneficio neto para los alumnos y sus familias, fueron muchos los conservadores que contemplaron con alarma la intromisión del Gobierno federal en las competencias educativas de los Estados.
- La Ley Agraria (o “Farm Bill” en el original inglés) de 2003, un catálogo de ayudas al sector primario equiparable a la Política Agrícola Común europea.

A pesar de que, objetivamente y en un sentido muy real, el grueso de la política interior del presidente tuvo un signo social marcado (haciendo honor al epíteto “compasivo” después del sustantivo “conservadurismo” que muestra la manera en que él acuñó su orientación ideológica), y, en rigor, más escorada a la izquierda que la Administración de Bill Clinton, la izquierda americana impuso la absurda representación de George W. Bush como una marioneta de los grandes negocios, mientras que la derecha le denigraba como una especie de “Tony Blair con rancho” (en expresión del escritor Mark Steyn).

### **“EL PRESIDENTE TUVO QUE ENFRENTARSE AL REFLUJO DEL PARAÍSO DE LOS NECIOS DE LOS AÑOS NOVENTA”<sup>8</sup>**

La debacle final y el paroxismo del desprecio al presidente por parte de la opinión publicada a derecha e izquierda vino en los últimos meses de su presidencia en el otoño de 2008. Durante el mes de agosto el Tesoro y la Reserva Federal debieron intervenir para salvar a las entidades de seguro del crédito hipotecario, Fannie Mae y Freddy Mac. El 14 de septiembre, la Administración dejó caer a Lehman Brothers y salvó a Merrill Lynch, mientras a su alrededor las empresas automovilísticas, City Group, AIG y una retahíla casi infinita de entidades de crédito desvelaban lo que aparentaba –es– ser una crisis general de solvencia en el mercado financiero americano. La Administración Bush y el Congreso impulsaron un par de semanas después un plan de rescate de los llamados “activos tóxicos” en los balances de las entidades financieras por valor de 750.000 millones de dólares. Como había sido la constante durante el segundo mandato del presidente, la izquierda vio en la crisis el resultado de la desastrosa y criminal política económica de George W. Bush, consistente en derribar cualquier regulación que mitigara los excesos de Wall Street, y la derecha contempló el plan de intervención en los bancos como la última gota en el más que colmado vaso de los zarrandeos al libre mercado propinados por el presidente en sus años en la Casa Blanca.

<sup>8</sup> Max Boot en su columna en *Los Angeles Times* el 23 de febrero de 2003.

La razón indiscutida por unos y otros en la base de la crisis era la existencia en el corazón del mercado financiero de productos derivados de las llamadas “hipotecas basura” (en España, en el original inglés “sub-prime”). La parte de la “basura” asociada a las hipotecas era debida a las nulas expectativas de los acreedores financieros a realizar el valor de sus créditos. No sólo era la imposibilidad de los deudores de hacer frente a créditos a los que nunca debieron haber accedido sino que, concurrentemente, la depreciación del valor de las viviendas hacía que éstas perdieran valor respecto a los créditos y, con frecuencia, que la deuda valiera más que el valor de mercado de las viviendas en sí. El Partido Demócrata sostenía que a esa situación se había llegado por las prácticas depredadoras de las entidades de crédito, incapaces de contener su avaricia. El Partido Republicano, sin dejar de coincidir con esa línea argumentativa (considerada como políticamente aconsejable en el actual clima político), apuntaba también las diversas regulaciones, y no desregulaciones, que habían contribuido a la crisis.

Los republicanos fueron acaso excesivamente timoratos en la exposición de la génesis de la crisis de las “hipotecas basura”. El origen remoto es la “Ley de Reinversión Comunitaria” (o “Community Reinvestment Act”, CRA) aprobada durante la Administración Carter en 1977. El objeto de la ley era forzar a las entidades de crédito a invertir en propiedad inmobiliaria en comunidades pobres, en particular relajando o incluso exceptuando determinados requisitos para formalizar la concesión de créditos hipotecarios a familias pobres que, manifiestamente, no podrían acceder a la propiedad de una vivienda en otro caso. La ley establecía unos baremos para medir el volumen de créditos otorgados por las entidades financieras en esas comunidades. Ese volumen se revelaría crucial a la hora de que las autoridades federales aprobaran o no la apertura de sucursales u operaciones de fusión o absorción entre dichas entidades.

Durante los años ochenta, la CRA se aplicó de manera menos severa, pero en los noventa, al amparo de la noción de que el crédito discriminaba contra familias afroamericanas por el hecho de serlo, la Administración Clinton fue mucho más rígida. Al final de la década, los bancos americanos habían concedido créditos que merecerían el epíteto de “basura” por

valor de un billón de dólares y, lo que es más, generalmente a través de grupos y ONGs de activistas en esas comunidades. Era una especie de “acción afirmativa” en el mundo del mercado hipotecario, con la tormenta perfecta de un exceso de regulación de la Administración federal hacia los bancos y una desregulación y descontrol apenas imaginable en una economía de mercado respecto de las actividades de estas organizaciones interpuestas entre los bancos y el público. A partir de 1995, el Departamento del Tesoro de Bill Clinton supervisaría obsesivamente los datos de los bancos por barrios, por niveles de renta, por la raza de los destinatarios y otra multitud de vectores extraños a los propósitos de una entidad de crédito. A la calificación de los bancos sobre esas bases se añadiría la respuesta de los bancos a las quejas de las ONGs como objeto importante de valoración. Es decir, la posibilidad de las entidades de crédito de obtener autorización del Tesoro para grandes operaciones dependería, al fin y al cabo, en buena medida, de las opiniones de grupos en el mejor de los casos ignorantes sobre la economía y las finanzas y, con frecuencia, con agendas anticapitalistas específicas. Simplemente amenazando con intervenir en un determinado expediente, la organización comunitaria de turno forzaba la concesión de la hipoteca y reemplazaba el criterio financiero del banco por sus propios objetivos políticos. En ocasiones, los propios bancos otorgaban una cantidad importante de capital a esos grupos (como NACA –National Community Reinvestment Coalition– o ACORN –Association of Community Organizers for Reform Now) para que le dieran los expedientes hechos, la única forma de asegurarse de que no protestarían.

El problema terminó explotando cuando lo ha hecho, pero en dos ocasiones, en 2003 y en otra oportunidad en 2005, la Administración Bush intentó modificar los términos de la CRA. En las tres ocasiones sus iniciativas naufragaron en el Congreso, específicamente en el Senado (donde los republicanos no llegaban a la mayoría de 60 escaños que les hubiera permitido aprobar la medida) por la oposición demócrata. En septiembre de 2008, una oscura ley de 1977 había hecho quebrar en la práctica todo el sistema financiero americano y no por una ausencia de desregulación sino por el exceso de ella; no por las prácticas depredadoras de la banca sino por la intimidación de ésta.

La recesión que empezó en los dos últimos trimestres del mandato del presidente Bush era la prueba de cargo para sus críticos, pero las críticas a la gestión económica del presidente habían comenzado mucho antes y también se repartían a ambos lados del espectro político. La izquierda le reprochaba los recortes de impuestos de 2001 y 2003, que percibía –y percibe– como injustos, y la derecha el aumento del gasto público, que percibía como cripto-socialistas. Las dos, derecha e izquierda, le censuraban el aumento del déficit público. Ninguna le concedía apenas el menor crédito político por siete años de crecimiento económico sostenido, con alto nivel de empleo, sin inflación y habiendo superado la recesión con que terminaron los ocho años de su predecesor así como los atentados del 11 de septiembre, que todos los analistas pensaron desatarían una crisis económica sin precedentes.

La política económica del presidente se aproximó a la de Ronald Reagan veinte años antes. La política de Reagan también consistió en recortes de impuestos y crecimiento del déficit, aunque sin el rasgo de gasto social de Bush que tanto enoja a los conservadores y que, de hecho, también enojaba al presidente Obama como candidato. Obama fue muy categórico en la crítica al gasto público bajo la Administración Bush, que calificó como irresponsable fiscalmente (la memoria de Obama como halcón fiscal se desvaneció rápidamente con la presentación de su primer presupuesto, que multiplicaba el déficit fiscal por tres, pero ese debate queda para futura ocasión).

En primer lugar, es justo decir que George W. Bush, como se insinuaba anteriormente, aumentó el gasto social en las áreas críticas de la sanidad y de la educación y, manifiestamente, en el capítulo de defensa, donde tuvo que hacer frente a la guerra genérica contra el terrorismo, las guerras de Iraq y Afganistán y los gastos de la seguridad interior. En segundo lugar, el Congreso americano tuvo a muchos críticos actuales del presidente votando sin ambages a favor de sus prioridades presupuestarias y añadiendo las propias. Entre 2001 y 2008, el gasto afectado por el Congreso aumentó en un 29% del total (un 22% si se sustrae el aumento del presupuesto de defensa). La deuda pública americana creció, en el mismo periodo, desde un 58% del PIB hasta un 66%. A manera de comparación,

la proyección de las prioridades presupuestarias del presidente Obama, contenidas en su reciente proyecto de presupuesto, elevarían la deuda pública más allá del 100% del PIB. El PIB actual de EE.UU. está en torno a los 14 billones y la deuda pública estimada para 2018, sobre la base de las propuestas de la Administración Obama, está por encima de 20 billones, es decir, dichas propuestas multiplicarían la deuda de seis a ocho veces más que su antecesor.

Un par de observaciones sobre la demagogia que rodea la cuestión de los recortes de impuestos y la manera en que benefician de manera supelementalmente desproporcionada a las familias acomodadas en detrimento de las clases más humildes. Hay que empezar por afirmar que el 1% de las familias americanas con nivel de renta más alto pagan el 40% de los impuestos y que el 5% de las familias más pudientes allegan el 60% de los recursos fiscales de los Gobiernos federales y de los estatales. Por el contrario, el 42% de los americanos no paga impuestos, cifra que se elevará hasta el 57% bajo la Administración Obama. Entre las familias con más recursos se encuentran, como es lógico, las que crean más riqueza, invirtiendo y consumiendo una parte proporcionalmente mucho mayor que su porcentaje de la riqueza nacional, porque es entre ellas donde se localiza la actividad empresarial y la creación de empleo. Si una economía quiere maximizar ambas cosas, la presión fiscal debe bajar sobre los sectores productivos. Por otra parte, si bajan los impuestos, la bajada no puede en ninguna provincia de la lógica beneficiar a quien no los paga y beneficia en menor medida a los que pagan una cantidad simbólica en concepto de renta, como ocurre con otro tercio de americanos adicional al 42% exento. Es imposible que un recorte de impuestos no beneficie más a quienes satisfacen el grueso de los recursos fiscales del Estado.

Sobre la lógica económica y fiscal de los recortes de impuestos, no hay debate posible sobre la segunda. En 2001, el presidente Bush aprobó una bajada de impuestos por valor de 1,35 billones de dólares por espacio de diez años (el plan vence en enero de 2011 y no será renovado por la nueva Administración y Congreso). La ley fiscal de 2001 abolía el impuesto de sucesiones, mitigaba la penalización de los matrimonios y doblaba las deducciones por hijos. La teoría de la economía llamada de “supply-side” (es

decir, la concepción de la economía desde el punto de vista del fortalecimiento de la actividad productiva como estímulo de la demanda agregada en sí misma) establece que a mayor actividad económica más ingresos fiscales. Esa teoría se evidenció con creces en la práctica. Entre 2003 y 2007, los ingresos de la hacienda federal por impuestos aumentaron desde 1,78 billones hasta 2,56 billones, un aumento de 785 mil millones que representa el mayor crecimiento de los ingresos fiscales en la historia de EE.UU. para un periodo cuatrienal.

La economía americana entre 2002 y 2008 registró un periodo de crecimiento sostenido en torno al 4%, una vez que la política económica de la Administración superó la recesión de los dos primeros cuartos de 2001 –continuación del último cuarto de la Administración anterior– y la depresión de la actividad del último cuarto de 2001, producto de los atentados del 11 de septiembre. Entre 2004 y 2005 se produjo el periodo más dilatado de creación de empleo en la historia americana: trece meses. De hecho, aunque se haya convenientemente olvidado, George W. Bush ganó la reelección en 2004 en parte gracias a la economía, entonces con un nivel de desempleo del 5,2% y una inflación del 2,6%. Desde cualquier punto de vista que se considere, esas cifras son perfectamente homologables con la época de prosperidad de los noventa que tanto han cimentado la popularidad de Bill Clinton.

### **“HE SEGUIDO LOS DICTADOS DE MI CONCIENCIA”<sup>9</sup>**

La prensa y la opinión pública mundiales siguieron con regocijo el incidente del zapato en Iraq, cuando un “periodista” arrojó los que llevaba puestos al presidente. Todos los medios glosaron cómo este gesto suponía infligir a su destinatario el mayor de los desprecios. Sólo uno, el *International Herald Tribune*, hacia el final de su crónica, incluía el detalle, aparentemente poco importante, de que el “periodista” había sido un gorila baazista bien conocido de sus víctimas durante los años de plomo de Saddam. La satisfacción vicaria que muchos periodistas –que probablemente también merecerían comi-

<sup>9</sup> George W. Bush en su Discurso de Despedida el 15 de enero de 2009.

llas– habían experimentado a cuenta del episodio en que un verdugo se despachaba contra el hombre que había liberado a sus víctimas, recordaba cómo otros, o quizás los mismos –en abundante compañía–, a la vista de un dictador genocida, uniformado, partidario del “anschluss” de los países vecinos, líder de un partido único y con el Mein Kampf como libro de cabecera, optaban por llamar nazi al hombre que se le oponía.

El presidente Bush es detestado por llevar a cabo en Iraq la política de cambio de régimen decidida por su predecesor y a pesar de que su sucesor, enfrentado a la posibilidad de cambiarla, ha determinado continuarla en la práctica. Es detestado y acusado de crímenes de guerra a cuenta de Guantánamo, los interrogatorios, las detenciones secretas, los programas de interceptación de llamadas, ...a pesar de que todos esos supuestos crímenes llevaban el aval de muchos de sus ahora acusadores en el Congreso americano y a pesar de que su sucesor, más allá del aparato retórico, aún tiene que llevar a cabo el menor cambio en ninguna de esas políticas. Es detestado por su supuesto secretismo y sus trabas a la libertad de información, cuando lo cierto es que nunca, en ningún Estado occidental, los ciudadanos se han desayunado cada pocas semanas con memorandos de inteligencia en primera página y nunca, en ningún país del mundo, un jefe de Estado ha sido insultado y amenazado diariamente en directo y en diferido y a placer, por los medios de comunicación y los particulares, calzados o descalzos, en EE.UU. o fuera de ellos. Es detestado por no respetar la Constitución cuando muy pocos presidentes (ciertamente no Abraham Lincoln, Woodrow Wilson, Franklin Delano Roosevelt o Lyndon B. Johnson), en periodo de guerra o de paz, han sido tan escrupulosos con ella. Es detestado por una crisis financiera escasamente creada por él –y, en buena medida, más bien por algunos políticos que le acusan–, producto del bloqueo de las regulaciones que su Administración intentó introducir para evitarla. Es detestado por un déficit fiscal, considerado exorbitante –entre otros por su sucesor–, pero rápidamente triplicado por éste. Es detestado por tener conciencia y considerarla no un obstáculo para la acción de gobierno sino, en verdad, su motivo último.

Un hombre menor hubiera sucumbido a su falta de popularidad en las encuestas y a la intifada mundial que acompañó la práctica totalidad de su

presidencia, a la animosidad del *establishment* político-mediático de Washington y a la intimidación y la invectiva diaria desde todos los puntos geográficos e ideológicos. Pero el presidente Bush tomó las decisiones que tenía que tomar en las circunstancias que fueren, cualesquiera que fueran las consecuencias para su dignidad y honorabilidad y abrazado a su sentido del humor y a la elegancia que, con frecuencia, fue el único en Washington en exhibir.

En los últimos días de su presidencia, George W. Bush recibía zapatos de baazistas en Iraq, llamamientos de congresistas, militantes y periodistas a su procesamiento por delincuente y, en el primer caso en la historia de la Presidencia, sufría las vejaciones de parte de la multitud congregada para la inauguración de su sucesor el pasado 20 de enero. Y algunos, casi sobrecogidos por el estoicismo del presidente, intentábamos imaginar qué clase de fibra moral, de seguridad interior y de fe en sí mismo y en sus convicciones pudo mantenerle en pie sin rendir una sola de ellas ni dejar de acompañarse de su afabilidad y de su dignidad discreta, sigilosa y firme. Aún lo hacemos.

Este artículo comenzaba con citas de Abraham Lincoln, al que el carácter del 43 presidente recuerda tanto más cuanto más se enreda el 44 en el manto del Gran Emancipador. Es justo, pues, cerrarlo del mismo modo.

“No puede haber justicia si no hay libertad”.

“Matar a inocentes en aras de una ideología es malo en todo tiempo y lugar. Liberar a la gente de la opresión y la desesperanza es eternamente bueno. Esta nación debe continuar pronunciándose por la justicia y la verdad. Siempre debemos estar dispuestos a actuar en su defensa, y defender la causa de la paz”.

Sólo que estas palabras no fueron proferidas por el decimosexto presidente, Abraham Lincoln, sino por el cuadragésimo tercero, George W. Bush. La primera, en ocasión de su Segundo Discurso Inaugural, el 20 de enero de 2005. La segunda, en su despedida de la nación el 15 de enero de 2009.

El debate sobre el presidente pertenece a la historia y aquí no se aventura el sentido de su juicio. En cuanto al debate sobre el hombre, mi opinión se aproxima a la de Carlyle sobre Tomás Moro: “Here was a man for every fate”.

**PALABRAS CLAVE:** EE.UU. • Libertad • Terrorismo islamista

## RESUMEN

Alvaro Martín repasa la presidencia de George W. Bush y la crítica impenitente que soportó durante toda ella. Sus decisiones en la Guerra contra el Terror y en la Guerra de Iraq han sido reivindicadas por la seguridad de los americanos durante los últimos ocho años y por la continuación de sus políticas por el nuevo presidente. Su legado social está encarnado en los dos jueces que nombró para el Tribunal Supremo, John Roberts y Samuel Alito. Su gestión económica fue sólida y es fácilmente la última persona a la que responsabilizar de la crisis financiera actual. Fue un presidente significativo. Es un hombre trascendente.

## ABSTRACT

*Alvaro Martín reviews the Presidency of George W. Bush and the relentless criticism he endured throughout. His conduct of the War on Terror and the Iraq War have been vindicated by the security of Americans for eight years and the continuation of his policies by the new President. His social legacy is embodied by two outstanding Supreme Court Justices, John Roberts and Samuel Alito. His economic record is a solid one and he may very well be the last to blame for the current financial crisis. He was a consequential President. He is a transcendent*

# LA ILUSTRACIÓN liberal

---

---

Revista española y americana

Primavera de 2009

NÚMERO

39



• • •

ESPAÑA

MIKEL BUESA: *Las peonadas de Zapatero*

MATÍAS JOVE: *'Influentials': lecciones para el PP de la campaña de Obama*

ESTADOS UNIDOS

JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ: *Abraham Lincoln, forjador de una nueva unión*

MANUEL PASTOR: *Abraham Lincoln: la consolidación de una nueva nación*

JOSÉ MARÍA MARCO: *R.J. Neuhaus: cristianismo y libertad*

ANTONIO GOLMAR: *Samuel Huntington, el penúltimo profeta*

CUBA

CARLOS ALBERTO MONTANER: *Cincuenta años de revolución cubana*

VARIA

JACQUELINE GOLDBERG: *Auschwitz, un viaje a pie*

CARLOS SEMPRÚN MAURA: *La sacralización del terror*

• • •

RETRATO: *Agustín de Argüelles*

RESEÑAS • EL LIBRO PÉSIMO • EL RINCÓN DE LOS SERVILES

• • •

Y acceda a los contenidos  
de todos los números anteriores  
en nuestra página web

[www.lailustracionliberal.com](http://www.lailustracionliberal.com)

E-MAIL: [lailustracion@libertaddigital.com](mailto:lailustracion@libertaddigital.com)